

El art. 57 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) dice así:

Artículo 57. Autoridades autonómicas de protección de datos.

*1. Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer, las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, **de acuerdo con la normativa autonómica**, cuando se refieran a:*

a) Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta.

b) Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente Administración Autonómica o Local.

c) Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los respectivos Estatutos de Autonomía.

2. Las autoridades autonómicas de protección de datos podrán dictar, en relación con los tratamientos sometidos a su competencia, circulares con el alcance y los efectos establecidos para la Agencia Española de Protección de Datos en el artículo 55 de esta ley orgánica.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, estableció en su art. 32 el “derecho de todas las personas al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las Administraciones públicas andaluzas”, y asimismo atribuyó en su art. 82 a la Comunidad Autónoma “la competencia ejecutiva sobre protección de datos de carácter personal, gestionados por las instituciones autonómicas de Andalucía, Administración autonómica, Administraciones locales, y otras entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas, así como por las universidades del sistema universitario andaluz”.

La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía asignó dicha competencia al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA). Según establece su artículo 43.1, el Consejo es la “autoridad independiente de control en materia de protección de datos (...) en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Y entre las atribuciones que dicha Ley encomienda a la Dirección del Consejo se incluya la de “desempeñar las funciones previstas en la legislación sobre protección de datos para su ejercicio

por las agencias autonómicas en su caso” [art 48.1.i), así como la de “resolver las consultas que en materia de (...) protección de datos le planteen las administraciones y entidades sujetas a esta Ley” [art. 48.1.e)].

La asunción efectiva por parte de dicho Consejo de la competencia en materia de protección de datos quedó diferida en virtud de lo establecido en la Disposición transitoria tercera del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La Orden de 1 de agosto de 2019, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, vino a fijar el 1 de octubre de 2019 como la fecha de inicio del ejercicio de las funciones en materia de protección de datos por parte del Consejo. Desde entonces, corresponde al Consejo desempeñar tales funciones respecto de los tratamientos de los que sean responsables las instituciones autonómicas de Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía, la Administración Local en Andalucía y otras entidades dependientes de cualquiera de ellas, así como las universidades del sistema universitario andaluz, en los términos previstos en el citado artículo 57 LOPDGDD.

Por último cabe decir que el art. 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (ley 40/2015) establece que *La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan **atribuida como propia**, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.* Desde el momento de la asunción de la competencia por el CTPDA en materia de protección de datos conforme a su propia normativa autonómica (el 1 de octubre de 2019), la competencia sobre los tratamientos de datos llevados a cabo por autoridades autonómicas andaluzas corresponde como propia al CTPDA, y no a la AEPD.

Por consiguiente, versando la consulta sobre una norma jurídica que está tramitando la Junta de Andalucía, referida a tratamientos de datos personales por el Sistema Sanitario Público de Andalucía, la competencia para informar sobre la misma corresponde al CTPDA.